

de Distrito investigara si con ella se invadían las facultades de la autoridad judicial, por que esta hubiese pronunciado ya su fallo definitivo, en cuyo caso habría flagrante violacion de las garantías individuales.

Que el fallo del Juzgado de Distrito en el juicio seguido contra Serratos por el representante del Fisco, sobre devolucion de los títulos que afianzaban la existencia de una capellanía desvinculada por dicho Serratos, no tiene el carácter de definitivo, pues se funda en una declaracion de la Gefatura de Hacienda sujeta, segun la ley, á la revision del Ministerio, y en consecuencia no hubo por parte de este invasion de las facultades judiciales.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo al C. José María Ibarra y Leon, contra un acuerdo del Ministerio de Hacienda.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toea.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 13 de 1874.—*Lic. Emilio Ordás,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por los Sres. Romano Hermanos, contra el cobro que les hace la Receptoría de Rentas de San Juan Bautista, del impuesto de un 6 por ciento sobre los derechos de importacion que han causado los efectos descargados en el Puerto de la Frontera, por la Barca inglesa "Belle of the Niger."

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: Por espaciosas que sean las razones alegadas y que puedan alegarse en pro del cobro de la contribucion de que se quejan los Sres. Romano Hermanos, mientras la imposicion ó el establecimiento de ese cobro no se presente acompañado de la constancia respectiva, de haberse cumplido con el requisito que para poder hacerlo exige á los Estados el artículo 112 de la Constitucion de la República en su fraccion 1ª, el que suscribe no podrá pedir otra cosa que el cumplimiento de ese artículo, por que á esto lo obliga el 126 de la misma Constitucion en su parte final, diciendo: "Los Jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, leyes y tratados, (los que deja establecidos por ley Suprema de toda la Union) á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados." Este precepto hará desvanecer cualquiera duda; mas puede añadirse que la derogacion de los arts. 19 y 83 del Arancel de Aduanas Marítimas de que hace tanto mérito la Receptoría, en nada tocó ni podía tocar tanto al testo constitucional, por que este no puede ser tocado, reformado ó adicionado por una ley secundaria, sino por otra que haga parte de la misma Constitucion, previo el concurso de las personas, corporaciones y requisitos señalados en su art.

127; y si tal derogacion debe tenerse por prueba del consentimiento requerido del Congreso de la Union, no parece ser el Juzgado de Distrito á quien toque declararlo.

Por tanto, el Promotor considera invadida la esfera de la autoridad federal en el artículo 112 fraccion 1ª de la Constitucion de la República, y el caso comprendido en la 3ª art 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, por lo que concluye pidiendo se conceda á los Sres. Romano Hermanos, el amparo que solicitan.

San Juan Bautista, 16 de Abril de 1874.

—*Lic. Oordera.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Abril 22 de 1874.—*Gabriel Sosa,* secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

República Mexicana. Juzgado de Distrito de Tabasco. San Juan Bautista, Abril 20 de 1874.—Visto el ocurso fecha 7 del corriente en que la sociedad "Romano Hermanos" solicita amparo contra la Receptoría de Rentas de este Partido, en cuanto al cobro que hace á estos Sres. como consignatarios del cargamento de la barca inglesa "Belle of the Niger," del 6 por ciento sobre los derechos de importacion causados por los efectos de dicho cargamento, los cuales están en parte satisfechos á la Aduana Marítima del puerto de Frontera, y en parte asegurados, como lo prueban por los documentos que acompañan; el informe en lo principal de la oficina contra quien se dirige el amparo; lo pedido por el C. Fiscal y demas constancias de autos, se considera:

Primero: La Receptoría de rentas en el estenso informe citado, pretende fundar su procedimiento en el decreto del Estado de 6 de Diciembre último, que impone á los efectos extranjeros ó nacionalizados que se introduzcan en el Estado, el derecho de un 6 por ciento de consumo, calculado sobre los de importacion que hayan causado. Sos-

tiene que este decreto no pugna con la fraccion 1ª art. 112 de la Constitucion nacional, fundándose en que la ley de 31 de Mayo de 1872, es decir, la de presupuestos para el año fiscal de 1872 á 1873, en la fraccion 1ª artículo único, deroga los artículos 19 y 88 del Arancel vigente, y en el primero de estos se halla inserta sustancialmente la dicha fraccion del art. constitucional, que dice testualmente: "Artículo 112. Tampoco pueden los Estados, 1º: establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puerto, ni imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones ni exportaciones."

El C. Receptor no se atrevió á decir que la ley de presupuestos deroga el artículo constitucional; conoció sin duda que esto hubiera sido ir demasiado lejos. Pero asegura que lo afecta en el sentido de que establece el consentimiento implícito del Congreso, para que los Estados decreten las contribuciones ó derechos que la ley fundamental les prohíbe, con lo cual quedó cubierto el requisito constitucional.

Segundo: el Tribunal no puede aceptar esa interpretacion de la fraccion 1ª de la ley de presupuestos. Ella versa sobre un objeto especial, á saber, el arreglo de los ingresos y egresos de la hacienda federal.

Al derogar pues el art. 19 del Arancel, es fuerza comprender que lo hace en la parte que se relaciona con aquel objeto, es decir, en su primer concepto que dice: "Los derechos establecidos en la tarifa precedente, serán los únicos que pagarán las mercancías extranjeras en la República."

El segundo concepto en cuanto comprende de la citada fraccion 1ª del artículo citado de la Constitucion, no podía ser atacado ni reformado por que lo prohíbe el art. 127 de la misma, ni era del caso tal generalidad en una ley especial y de efecto transitorio. Ese consentimiento implícito, general y absoluto que en la citada ley de presupuestos quiere ver el C. Receptor de parte del Soberano Congreso de la Union,

en favor de los de los Estados para dispensarlos de la observancia del art. 112 de la Constitución en la parte de que se trata, es decir, en su fracción 1ª, equivaldría á su plena derogación. Es pues una suposición de todo punto inadmisibile.

Ademas de las consideraciones expuestas, hay que hacerse cargo de que el consentimiento de que habla el art. 112, ha de ser librado especialmente en favor de los Estados que lo soliciten, y con fundamento de circunstancias particulares que lo hagan razonable.

Pretender que en una ley especial, en una ley cuyo objeto no tiene conexión alguna con la prohibición de imponer derechos de puerto, que á los Estados hace el art. 112 de la Constitución se establezca una escepción general y ademas fundamental, es un pensamiento que el buen sentido rechaza á su sola anunciación.

No se halla pues semejante concepto en la fracción 1ª de la ley de 31 de Mayo de 1872, y aun cuando se hallara no habría perdido un átomo de su vigor el artículo constitucional, visto lo que establece el 126 del mismo Código.

En vista de tales consideraciones, no es posible dejar de juzgar el cobro que hace la Receptoría de rentas á los Sres. Romano Hermanos, como un acto que infringe la garantía comercial consignada en el artículo 112 fracción 1ª de la Constitución nacional, caso comprendido en la fracción 3ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, y por tanto, y con fundamento del mismo y demas citados, el Tribunal decreta: 1º: La Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Romano Hermanos, contra tal providencia. 2º: Se declara subsistente hasta nueva disposición superior, el acto de suspensión inmediata de fecha 10 del corriente. 3º: Sacadas las copias de estilo, elévense los autos á revisión.

Así lo proveyó el C. Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado, y firma conmigo su Escribano que doy fé.—*L. Correa.* Ante mí,—*Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Abril 22 de 1874.—*Gabriel Sosa,* secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 12 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por los Sres. Romano Hermanos, contra el cobro que les hace la Receptoría de rentas de San Juan Bautista, del impuesto de un 6 por ciento sobre los derechos de importación que han causado los efectos descargados en el puerto de la Frontera por la barca inglesa "Belle of the Niger," cuyo impuesto, segun manifiestan los quejosos, no puede hacerse efectivo sin contravenir á la prevención terminante de la fracción 1ª del art. 112 de la Constitución federal; y

Considerando: que la fracción 1ª del art. 112 constitucional, declara: que no pueden los Estados, sin consentimiento del Congreso de la Union, imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones ó exportaciones. Que el Congreso general aun no ha prestado su consentimiento para que los Estados puedan imponer esta clase de derechos, ni se pueda considerar como llenado este requisito con la derogación de los arts. 19 y 88 del Arancel de Aduanas vigente, decretado por la ley de presupuestos de 31 de Mayo de 72, pues la prohibición que tienen los Estados de gravar la importación, no dimana de las prescripciones del Arancel de Aduanas, sino del art. 112 constitucional que ha quedado en todo su vigor.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Tabasco en 24 de Abril del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Romano Hermanos, con-

tra el cobro del impuesto sobre importacion de efectos que ha dado origen á este recurso.

Devuélvase las actuaciones al juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, publicándose y archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. CC. Presidente: —*José M. Iglesias.* Magistrados: —*Juan J. de la Garza.* —*José M. Lozano.* —*M. de Castañeda y Nájera.* —*Ignacio Ramírez.* —*Ignacio M. Altamirano.* —*Simon Guzman.* —*Luis Velasquez.* —*M. Zavala.* —*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto de 1874. —*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por D^a Luisa Rodriguez de Salas, en representacion de su hijo José M. Salas, contra los procedimientos del que era entonces Gobernador del Estado, por infraccion de garantías.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Saltillo, Abril 17 de 1874. — Visto este juicio de amparo promovido por la Sra. D^a Luisa Rodriguez de Salas, en representacion de su hijo D. José María Salas Rodriguez, contra el acto del C. Gobernador del Estado, Victoriano Zepeda, que lo mandó reducir á prision, sin la orden escrita de autoridad competente y demas requisitos legales. Visto el auto de suspension del acto reclamado, dictado sin previo informe de la autoridad ejecutora, por no haberlo rendido dentro del término legal, ni del pedimento

del Ministerio público, representado por el C. Gefe de Hacienda, por la misma razon, y quien devolvió el expediente sin pedir nada sobre el acto reclamado. Visto el escrito de la misma Sra. Rodriguez de Salas, en el que se queja de nuevos atentados contra la persona de su citado hijo, hechos por el mismo C. Gobernador; la comunicacion de este en la que dice, que no rinde el informe que se le pide, por ser ya extemporaneo, en virtud de hallarse en absoluta libertad la persona por la que se interpuso este juicio; y visto finalmente cuanto mas debia verse y ver convino.

Considerando que el C. José María Salas Rodriguez, libre ya de la prision, se presentó al Juzgado, pidiendo continuara este juicio por todos sus trámites, y ha justificado plenamente los hechos de que se queja su Señora madre.

Que no cabe duda que al ser reducido á prision el Sr. Salas Rodriguez, por orden verbal del C. Gobernador del Estado, sin anteceder las formalidades legales, se ha infringido el artículo 16 de la Constitucion general de la República, por haber sido molestado en su persona, sin la orden escrita de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, ni se ha justificado siquiera por la autoridad ejecutora, que hubiese motivos fundados para decretarla.

Que el lapso del término para decretar el auto motivado de prision, constituye tambien una infraccion al artículo 19 de la misma Constitucion federal, lo mismo que no habérsele manifestado el motivo de su prision, lo que se verifica al tomársele la declaracion preparatoria, artículo 20 fraccion 1^a y 2^a de la propia Constitucion.

Que no solo es objeto de los juicios de amparo, el que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes, sino que en muchos casos se busca, mas que la cesacion material del agravio, la reparacion moral de una declaracion solemne y autorizada de que se ha cometido un atentado. (Ejecutoria de la